

COVID-19 ¿Por qué la UE debe ser solidaria con sus vecinos?

Eduard Soler i Lecha, investigador sénior, CIDOB
[@solerlecha](#)



¿Cómo afectará la crisis del coronavirus a la relación de la Unión Europea con los países de su entorno? ¿Qué margen tiene la UE para ayudar a afrontar conjunta y solidariamente este desafío en su vecindario sur? Europa deberá adaptar prioridades e integrar esta nueva situación en sus relaciones con los países del sur y el este del Mediterráneo y en África subsahariana.

621

ABRIL
2020

Hace unos años tuve la ocasión de discutir largamente con un político europeo que estuvo en primera línea durante el estallido de la crisis económica de 2008 y su llegada a Europa en forma de crisis de la deuda soberana. El político en cuestión hablaba con amargura del poco tiempo que en 2011 habían tenido los líderes europeos para preocuparse de lo que sucedía al otro lado del Mediterráneo y articular una respuesta conjunta y ambiciosa ante los aires de cambio que empezaban a soplar en el mundo árabe. Cada país iba por libre y todos los esfuerzos – se lamentaba – estaban concentrados en resolver la crisis europea, la negociación del rescate griego, mitigar el riesgo de contagio o peor, la quiebra del proyecto de construcción europea. No había ni tiempo, ni recursos para nada más. ¡Cómo íbamos a condonar deuda o multiplicar la ayuda a nuestros vecinos cuando le estábamos dando a Grecia unos préstamos con intereses abusivos y decíamos que eso era ayuda! – añadía ese político. Poco después, en 2015, los líderes europeos volvieron a mirar hacia el Mediterráneo, pero no con afán solidario ni con voluntad de acompañamiento sino para protegerse de los envites de la inestabilidad de sus vecinos. La crisis migratoria en el Mediterráneo Oriental y los atentados en varias capitales europeas pusieron de manifiesto que la inacción acarrearía consecuencias y que, de tanto mirar hacia casa, no se habían dado cuenta de que el vecindario estaba en llamas.

Para entender porque la COVID-19 puede desestabilizar los vecinos mediterráneos y africanos de la UE, es necesario identificar distintas formas de vulnerabilidad. La primera es que la inmensa mayoría de estos países cuenta con unas infraestructuras sanitarias precarias y escasean los recursos humanos y farmacéuticos para hacer frente a la emergencia. Por ejemplo, Marruecos tiene un tercio de las camas por habitante de España, y Egipto seis veces menos que Francia. Si hablamos de cuidados intensivos, la situación es bastante más crítica y son todavía más alarmantes los datos de África subsahariana. Por ejemplo, Burkina Faso, uno de los

países africanos más afectados hasta ahora por la pandemia, dispone solo de 11 respiradores para una población de 19 millones. A esto se añade el hecho que una de las mayores fugas de talento del continente se ha producido en el ámbito sanitario: se calcula que en la última década cada día ha migrado un doctor formado en África hacia los Estados Unidos. Además, muchos países del sur y este del Mediterráneo, y aún más los de África subsahariana, tendrán grandes dificultades para adquirir en un mercado global especulativo los productos sanitarios para hacer frente a la pandemia, quedando a merced de donaciones oportunistas o altruistas. Mención aparte merecen países o territorios como Siria, Yemen, Libia o la franja de Gaza que han visto destruidas sus infraestructuras – también la sanitaria – tras años de violencia.

Algunos de estos países pueden pensar que, a pesar de la precariedad de sus sistemas sanitarios, pueden resistir mejor a la pandemia porque tienen una población más joven, un clima cálido que quizás reduzca el riesgo de contagio, o porque introdujeron medidas de confinamiento cuando el número de casos no era tan elevado como en el sur de Europa. Todo esto está por ver, pero incluso si fuera así, lo que no podrían evitar son las consecuencias económicas. Es el caso de aquellos con mayor dependencia del comercio con Europa, como las economías del Magreb que en algún caso roza el 70%. En este caso, además, los mercados principales son España, Francia e Italia, tres de los países más afectados sanitaria y económicamente. También ha aumentado la vulnerabilidad porque esta crisis se está ensañando en algunos sectores como el turismo, la energía o el tráfico marítimo, que son vitales para muchos de los vecinos de la Unión. Antes de la expansión de la COVID-19, el turismo y el sector de viajes, así como las actividades económicas indirectas, representaban una parte importante del PIB de países representaba una parte importante del PIB de países como Marruecos (8%), Túnez (8%), Egipto (11%) o Turquía (12%). En el caso de Argelia, un 60% del presupuesto estatal proviene de la exportación de gas natural y petróleo, y Egipto obtuvo, en 2019, 5.800 millones de dólares por los derechos de paso del Canal de Suez. En algunos países de África subsahariana, como Senegal, Kenia o Tanzania, el turismo tiene un peso similar, y la estabilidad presupuestaria en países como Nigeria o Angola también depende de las fluctuaciones de los mercados energéticos. Además, en algunos de estos países los efectos de la pandemia son incluso menores que otras amenazas igualmente devastadoras como la plaga de langostas que está destruyendo buena parte de la cosecha en África Oriental.

A esto hay que añadir que las consecuencias económicas de esta crisis no afectarán a todos por igual. Los países árabes ya tenían uno de los índices de desempleo juvenil más elevados del mundo y varios países de Oriente Medio y África se encuentran entre los más desiguales del mundo. Además, las medidas de protección en forma de distintos mecanismos de confinamiento y cuarentena son especialmente duras para algunos de colectivos. Entre estos, los refugiados hacinados en campos o en infraviviendas. Otro segmento poblacional, especialmente numeroso, son todas aquellas familias que dependen de los ingresos de la economía informal y que, en estos momentos, se encuentran sin ahorros, sin ninguna red de protección social y sin más apoyo que la que puedan prestar redes de solidaridad vecinal y organizaciones caritativas.

Algunos países y colectivos específicos son altamente dependientes de la cooperación internacional para el desarrollo. Uno de los efectos secundarios de la anterior crisis económica fueron los drásticos recortes en este campo. Un país como España, por ejemplo, pasó de destinar el 0,46% a

cooperación en 2011 a sólo el 0,12% en 2015. Una reducción de aportaciones de los principales donantes en este momento sería especialmente grave ya que Naciones Unidas había advertido antes de empezar el año que estimaba que 168 millones de personas en 59 países distintos requerirían ayuda humanitaria en 2020. A esto habría que añadirle que los cierres de fronteras impedirán el desplazamiento de cooperantes, entre ellos el personal sanitario.

Finalmente, aumenta la vulnerabilidad de individuos y organizaciones de la sociedad civil que ya estaban en los radares de mecanismos represivos en sistemas autoritarios. El recurso a mecanismos reforzados de vigilancia con el pretexto de reducir la expansión de la epidemia servirá para impedir la expresión del malestar colectivo en las calles y para aumentar la vigilancia sobre individuos concretos. Otro tipo de represión es la que se da en las casas dentro del entorno familiar. En Turquía, por ejemplo, la policía y las organizaciones feministas han denunciado un aumento de casos de violencia contra las mujeres. De otros países de la región no hay datos, pero la situación puede ser igual o peor.

A la luz de todo ello habrá que adaptar prioridades e integrar esta nueva situación en las relaciones de vecindad de la UE y, de forma más amplia, en su acción exterior. Vale la pena recordar que el Tratado de la UE, en su artículo 8, dice que se establecerá una relación estrecha y cooperativa con los países vecinos, y que la Estrategia Global Europea de 2016 identificaba la necesidad de aumentar la resiliencia de los estados y sociedades de nuestro entorno. Además, a finales de 2019 se enarboló la bandera de una Europa más geopolítica y, a penas unos días antes de que se desatara el pánico en el viejo continente, la Comisión y el Alto Representante hicieron pública su estrategia con África. 2020 también tenía que ser el año en el que actualizar y potenciar las relaciones euro-mediterráneas, aprovechando el 25 aniversario del Proceso de Barcelona. Entre las muchas decisiones que deberán tomar los líderes europeos en las próximas semanas está si renuncian a todo esto o le dan un nuevo significado, adaptando las prioridades y los instrumentos a una realidad bien distinta a la que imaginaban a principios de 2020.

Lo primero será entender que la imagen de desunión mostrada por la UE durante la primera fase de la pandemia ha dañado no solo su reputación interna sino también la externa. Por lo tanto, esto es lo primero que hay que corregir, seguido de medidas que mitiguen el daño económico y apuntalen la reconstrucción de las economías europeas. La recuperación económica en la UE es uno de los mecanismos más eficaces de amortiguar el golpe de esta crisis entre sus vecinos debido al alto nivel de (inter)dependencia. Y no hacerlo, una de las formas de perpetuar y ampliar la crisis en su vecindario.

Junto a estos deberes en el plano interno, habrá que adaptar prioridades e instrumentos en el ámbito de la política exterior y de cooperación. La efectividad pasa, antes que nada, por preguntar a sus vecinos cuáles son sus necesidades y diseñar respuestas en consonancia. Pero si hay algo que ya puede anticiparse son las dificultades de algunos de ellos para afrontar la compra de equipamiento básico. Desde la UE pueden plantearse iniciativas tempranas de compra conjunta o compartir excedentes con aquellos que más lo necesiten. Desde las delegaciones de la UE y los programas de cooperación ya en marcha, habrá que tener la agilidad necesaria

para dedicar mayor atención a los colectivos más vulnerables (economía informal, víctimas de la violencia de género, sociedad civil crítica, entre muchos otros). Y puesto que esta crisis coincide con la negociación del próximo marco financiero de la UE, es un buen momento para exigir una dotación para la acción exterior que esté a la altura de los desafíos. Además, estos presupuestos deberán apuntalar planes de recuperación económica que pueden incluir ámbitos como el turismo sostenible, políticas de reindustrialización verde e impulso a la ciencia y la investigación, que deberían abrirse a la participación de países vecinos.

Los países e instituciones europeas también pueden aliarse con sus vecinos mediterráneos, africanos y de otros países para exigir que las vacunas y la medicación que puedan desarrollarse sean accesibles universalmente y a un precio razonable. Demanda que no debería ceñirse a la COVID-19 sino a otras enfermedades que afectan al continente africano con especial intensidad. También se deben articular mecanismos internacionales para evitar que pueda repetirse una situación parecida o, en todo caso, para mitigar sus efectos. En esa línea, la UE puede utilizar los marcos de cooperación como el diálogo bi-continental con la Unión Africana, la Unión por el Mediterráneo o el diálogo euro-árabe para articular respuestas multilaterales y cooperativas a la gestión de un desafío que trasciende la esfera sanitaria.

Estos días, expertos e intelectuales nos alertan de cuán fácil es construir falsos dilemas y lo difícil que es desmontarlos para no verse obligado a escoger entre salud y economía o entre seguridad y privacidad. Hay que evitar añadir un tercer falso-dilema a la lista: el que invitaría a escoger entre la solidaridad interna y la externa.